

Supervivencia en las calles desde las márgenes : un debate respecto a las diferencias posibles y reconocibles en contextos difusos e indiferenciados	Título
Sánchez Lovell, Adriana - Autor/a;	Autor(es)
Hegemonía cultural y políticas de la diferencia	En:
Buenos Aires	Lugar
CLACSO	Editorial/Editor
2013	Fecha
Colección Grupos de Trabajo	Colección
Política de seguridad; Desigualdad económica; Desigualdad social; Exclusión social; Violencia; Política social; Políticas de la diferencia; Zonas urbanas; América Central; Costa Rica;	Temas
Capítulo de Libro	Tipo de documento
" <a href="http://biblioteca.clacso.org.ar/clacso/gt/20130716104150/Adriana_Lovell.pdf">http://biblioteca.clacso.org.ar/clacso/gt/20130716104150/Adriana_Lovell.pdf</a> "	URL
Reconocimiento-No Comercial-Sin Derivadas CC BY-NC-ND <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/deed.es">http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/deed.es</a>	Licencia

Segui buscando en la Red de Bibliotecas Virtuales de CLACSO

<http://biblioteca.clacso.edu.ar>

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO)

Conselho Latino-americano de Ciências Sociais (CLACSO)

Latin American Council of Social Sciences (CLACSO)

[www.clacso.edu.ar](http://www.clacso.edu.ar)



# **SUPERVIVENCIA EN LAS CALLES DESDE LAS MÁRGENES**

## **UN DEBATE RESPECTO A LAS DIFERENCIAS POSIBLES Y RECONOCIBLES EN CONTEXTOS DIFUSOS E INDIFERENCIADOS**

**Adriana Sánchez Lovell\***

### **INTRODUCCIÓN**

Centroamérica es una región mundialmente (re)conocida por ser una de las más violentas del mundo. Lamentablemente, esa es una de las particularidades que le permiten posicionarse en el mapa global como un espacio territorial requerido de ser comprendido e intervenido.

Además, a nivel de las relaciones entre países centroamericanos las fragmentaciones, la competencia y la indiferencia son cadenas con las que aún no se ha logrado romper. Las políticas migratorias y los peligros que significa traspasar las fronteras de sur a norte, por ejemplo, de Costa Rica hacia Nicaragua, o del Salvador hacia Guatemala, México y los Estados Unidos, repercuten en complejas cadenas de violencia, exclusión y desigualdad.

Para agravar el asunto, entre la mayoría de países centroamericanos, especialmente para los temas más sentidos por la población, no se ha logrado crear vínculos y redes de cooperación que permitan disminuir y combatir las desigualdades económicas y sociales, ni tampoco en términos de políticos y culturales, lo cual se evidencia en las

---

\* Licenciada en Psicología de la Universidad de Costa Rica. Actualmente trabajo como investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica, donde me encuentro cursando la Maestría Académica en Historia, CIHAC-UCR.

dificultades para incluir a los países del istmo al unísono en centros de toma de decisiones, organizaciones y proyectos económicos así como políticos, similares al caso del Mercosur.

De tal manera, continúa siendo el mismo Norte el que impulsa en mayor medida, con sus políticas, recursos e influencias, la intervención sobre algunos de los problemas más sentidos en la región, no sólo desde el punto de vista macro, sino que también a niveles comunitarios, organizacionales y familiares.

De forma tal que cabe preguntarse: ¿cómo se manifiestan las políticas de la diferencia en Centroamérica? Y ¿cómo se vinculan éstas con la reproducción de la violencia en relación con las políticas de seguridad nacional y locales?

Para comprender este problema, es necesario atender a las dimensiones económicas, políticas e ideológicas constitutivas de la violencia en la región y evidenciar algunas de las necesidades y vicisitudes que afectan cotidianamente a los centroamericanos.

En los siguientes apartados se discute el enfoque de la diferencia como diferencia estructural. Posteriormente, se evidencian las concepciones acerca de la violencia y sus políticas al respecto para con la región por parte del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, extrapolándolas hacia las políticas nacionales de seguridad nacional y evidenciando como éstas impactan en las políticas locales sobre el espacio, las cuales violentan las oportunidades de los centroamericanos en las capitales del Istmo.

### **LA DIFERENCIA COMO DIFERENCIA ESTRUCTURAL**

Máriam Martínez (2011) se inspira en la concepción de justicia de Young (2000) a partir de lo cual realiza su crítica a la equiparación entre las políticas de la diferencia y las reivindicaciones identitarias. Apunta a que dicha equiparación subyace a las aproximaciones actualmente predominantes y provoca que en las ciencias sociales, las luchas sociales así como en los organismos políticos, se hayan dejado de lado las luchas por reivindicaciones económicas.

La clase social da lugar al grupo cultural, la igualdad deja de ser instrumento de emancipación, y en su lugar se demanda la diferencia; las concepciones de justicia más tradicionales basadas en la distribución equitativa, se desplazan a favor de otras concepciones de justicia que apelan, en primera instancia, al reconocimiento de la diferencia (Martínez, 2011: 12).

Contrario a ello, Martínez sostiene la noción de la diferencia anclada a la diferencia estructural y propone:

Un enfoque alternativo centrado en injusticias que surgen de diferencias estructurales como la posición social, la división del trabajo, la socialización de capacidades y los procesos de normalización que construyen qué es lo normal y qué es lo desviado, de una manera excluyente y opresora para determinados segmentos sociales (Martínez, 2011: 604).

Máiriam Martínez (2011) argumenta que, si bien con Kant se cristalizó el concepto moderno de igualdad, el cual supone que todos los ciudadanos son iguales ante la ley y merecedores de los mismos deberes y derechos, en la práctica, las diferencias individuales de estatus, poder, etnia y clase son categóricas en la producción naturalizada de la exclusión y la marginación social. De manera que la igualdad de derechos no impide que exista intensos procesos de discriminación contra determinados grupos sociales por su pertenencia a determinados colectivos:

Algunos autores han señalado que a pesar de que tal concepto de ciudadanía pretendió la misma aplicación de derechos, deberes, de normas y leyes para todos, siguieron existiendo grupos de personas que se veían excluidos y marginados socialmente, sintiéndose de alguna manera, como “ciudadanos de segunda”. Es cierto, esto sólo podría tener una explicación marxista. Las actividades sociales que determinan el estatus social suelen ser oligárquicas, y además, los ciudadanos no tienen apenas control sobre la vida económica (Martínez, 2011: 605).

De ahí los peligros de limitarse al concepto de diferencia comprendida desde los parámetros de la cultura, haciéndose necesaria la restitución de las concepciones de igualdad y las utopías de la justicia redistributiva como los horizontes de la crítica social y contemplar las siguientes categorías de análisis para atender al unísono a las diferencias estructurales, políticas y culturales: la normalización, la reproducción de status quo y la reproducción de prácticas de opresión.

Las políticas de la diferencia y las luchas por la justicia se consideran pertinentes para leer el fenómeno de la violencia. En este ámbito, Phillipe Bourgois sostiene que las manifestaciones más palpables de la violencia en el caso de Guatemala, a menudo se expresan en delitos menores, peleas de cantina y violencia doméstica. De la misma manera, la violencia cotidiana se conecta con las formas invisibles de la violencia simbólica, estructural y normalizada, las cuales se superponen y se traslapan en un continuum, lo cual es: “particularmente importante en la era contemporánea de liberalismo globalizado, cuando la creciente ostentación de acciones abusivas, criminales, delincuenciales y auto-infringidas oscurece las jerarquías de poder históricamente arraigadas

que imponen un sufrimiento desproporcionado sobre los pobres según patrones predecibles” (Bourgeois, 2009: 30).

Para entender mejor como operan los discursos distorsionando dichas conexiones, es útil echar vista a los análisis y políticas instauradas por las instituciones de gobierno, algunas ONGs y los medios de comunicación, los cuales a su vez inciden sobre la opinión pública. Sería pretencioso profundizar aquí en todos sus aspectos, pero sí es posible atender a algunas de las aproximaciones más recientes al fenómeno. Cabe entonces atender a las interpretaciones dominantes acerca del problema de las violencias en Centroamérica.

### **DISCURSOS Y POLÍTICAS REFERENTES A LA CUESTIÓN DE LA VIOLENCIA EN CENTROAMÉRICA**

Como un primer aspecto respecto a lo que se ha venido diciendo, es digno de resaltar que el punto de partida del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) es que las y los habitantes centroamericanos sitúan la violencia como su primera preocupación ciudadana. Contrasta esto con su posición al respecto durante la década del ochenta, cuando en el contexto de las guerras civiles, los aspectos más sentidos por la comunidad centroamericana eran la pobreza, la desigualdad y la guerra (Sapoznikov, sf.).

Esto evidencia las dimensiones que ha tomado la violencia en la región, pero también da cuenta de cambios en la forma en que la opinión pública externa sus prioridades, las cuales han sido mediatisadas por los discursos políticos y de los medios de comunicación. Por ejemplo, según lo revela la recién publicada Encuesta de Victimización en Costa Rica, basada en Censos de Hogar y Estadísticas de instituciones como el Poder Judicial, en 1989 la victimización afectó al 6.2% de los hogares, porcentaje que ascendió al 28% en el 2008 para luego descender al 20, 2% en el 2010. No obstante, la ciudadanía respondió con dudas ante la realidad de dicho decrecimiento, lo que evidencia el malestar de la opinión pública respecto al problema de la violencia y su actitud frente al problema.

La más reciente Cumbre de Presidentes de Centroamérica versó sobre el tema de la Seguridad Ciudadana. En dicha Cumbre, se achacó a la violencia costos económicos de 6500 millones de dólares de los cuáles, el 50% se atribuye a pérdidas en salud, casi el 25% en gastos privados en seguridad y lo restante en costos institucionales y pérdidas institucionales (Revista *Summa*, 24 de junio de 2011).

Ligado a los temas de prevención y castigo, está el gasto en seguridad. Napolitano menciona que Barack Obama cuadruplicó el gasto de Estado para el control y el combate de drogas de 2500 millones de dólares a 10000 millones. El interés por influir las políticas del Istmo radica

en que por Centroamérica pasa el 90% de la cocaína que es consumida en los Estados Unidos (*La Nación*: 3 de marzo de 2012).

Cabe retomar, respecto al tema de la inversión en seguridad por parte las naciones latinoamericanas, la pregunta acerca de las posibilidades reales de controlar los usos que se hacen de esos fondos públicos y privados y por quiénes tienen el poder de direccionar las políticas de seguridad en el Istmo. Por ejemplo, el Estado de Costa Rica invertirá este año 338 millones de dólares en seguridad, 11% más que en el 2011 (*Suma*, 24 de junio de 2011).

Dicho estado de las cosas deja dudas respecto a en qué medida estos limitados recursos responden a las intenciones y los deseos impuestos desde el Norte. ¿Cómo afecta el presupuesto en el abstracto concepto de la seguridad la designación de recursos a otras partidas, como las sociales? Y ¿cómo esto se traduce o no, en optimizar las condiciones de bienestar y vida para los gobernados?

La escalada en la violencia, se dice, afecta principalmente a jóvenes y mujeres. La tasa de homicidios en la región es la más grande del mundo, con 33.3 por 100 000 habitantes, mientras que en la población entre 15 y 24 años ésta asciende a 38.6., quintuplicando la tasa mundial. La respuesta propuesta por el BID se evidencia en que es el principal oferente de programas de seguridad en la región, con inversiones que ascienden a 580 millones de dólares (*Revista Summa*, 24 de junio de 2011).

Sin embargo, actualmente, el BID indica abstenerse de contribuir a las políticas represivas en la región, por temor a verse involucrado a la violación a los derechos humanos. Contrasta este panorama de abordaje con el que protagonizaron diversos organismos internacionales durante la época del conflicto armado (Sapoznikov, sf.).

Mientras tanto, para el Banco Mundial-LAC (2011) las tres causas principales de la violencia en el Istmo son: el tráfico de drogas, la violencia juvenil y las maras, así como el recurso de las armas de fuego. Como cuarto factor está la debilidad de las instituciones judiciales, aparejada a la corrupción y la falta de transparencia para llevar los procesos, lo que se achaca a sus ligámenes al narcotráfico.

Al mismo tiempo, las tareas fundamentales que deben emprender los gobiernos centroamericanos desde la perspectiva del Banco Mundial (BM), radica en implementar políticas institucionales a nivel nacional, políticas locales y comunitarias, a la vez que intervenir sobre las causas estructurales de la violencia, sobre las cuales sin embargo, poco se avanza en la práctica (Banco Mundial-LAC, 2011).

No obstante, a nivel de las instituciones, ni las esferas negativas del control, la adaptabilidad y castigo, ni las positivas, de promover la inclusión, el desarrollo humano y el bienestar social general, se acoplan

a la sociedad actual. En vista de ello, se comparte la posición de Sánchez (2006) quien asegura que las instituciones tradicionales que aseguraban el control estatal sobre la vida de sus gobernados deben cambiar para adaptarse a las condiciones actuales que atraviesa la sociedad.

Incluso las funciones de control, disciplina y formación de clases que jugaban los centros educativos, está fallando como mecanismo por la cantidad de jóvenes que están debiendo trabajar y no estudiar para ganarse la vida, sino que son obligados a trasladarse a espacios violentos para ganarse la vida, dónde están perdiéndola progresivamente en tanto aumentan la incidencia de muerte en personas cada vez más jóvenes. A estos habría que agregar la cantidad de jóvenes a quienes ya no les parece atractiva esta opción y deciden tomar sus propios caminos, al margen de las instituciones tradicionales de orden y socialización del Estado (Sánchez, 2006).

Entre las políticas comunitarias y locales que el BM sugiere están: los programas de desarrollo infantil temprano y de preparación para la maternidad y la paternidad, así como generar prácticas de prevención de la violencia a través de las escuelas, mejorar el acceso y la permanencia en la educación secundaria, implementar programas de barrio seguro, reducir la disponibilidad de armas y disminuir el consumo de alcohol en la población, etcétera.

Ciertas de esas políticas involucran la intervención de las instituciones y organismos sobre la vida privada de quienes habitan las comunidades que se consideran en situación de riesgo o vulnerabilidad. Por ejemplo, se recomienda la visita de enfermeras a las casas de los padres para evitar situaciones de violencia y maltrato contra los niños y las niñas, así como la preparación para la maternidad y la paternidad antes de ejercerla.

La idea de fondo respecto a la prevención local y comunitaria con la tenencia de armas y para la reducción del consumo del alcohol y las drogas, es que se puede atacar el problema desde los niveles subjetivos y culturales, cuando estas políticas van de la mano con el combate al narcotráfico.

Respecto al narcotráfico, en Costa Rica el número de denuncias por delitos en total, pasó de 36100 en 1985 a 235195 en 2010 (INEC-PNUD, 2011). De ellas, el narcotráfico pasó de representar el 3.69% de las denuncias al 27% de las mismas.

A propósito, en el documento *Crimen y violencia en Centroamérica*, se invita a secundar las políticas anti narcotráfico implementadas por Colombia, a sabiendas de sus consecuencias, de la mano con el fortalecimiento del Sistema Judicial (Banco Mundial-LAC, 2011). Mientras que las medidas propuestas por Napolitano son: prevenir el consumo de drogas, intervenir mediante el tratamiento de las adicciones, fortalecer

la legislación e incrementar los controles fronterizos, semejando las recomendaciones del BM (Elpaís.cr, 2012:28 de febrero).

No obstante, existen diferencias de criterio al respecto en los poderes Ejecutivos del Istmo y actualmente está el debate sobre la legalización de las drogas en la mesa de discusión de los países del Istmo. Principalmente preocupa el grado de violencia al que ha llevado la política anti narcotráfico en países como México. Guatemala se declaró anuente a la legalización mientras que El Salvador y Panamá lo descartaron.

Para muestra un botón: el día jueves 28 de febrero de 2012 la presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, se reunió con la Secretaria de Seguridad de los Estados Unidos Janet Napolitano, para conversar sobre la política de seguridad del país. Ante la consulta hecha por la mandataria, Napolitano planteó que no era conveniente legalizar las drogas, como lo está proponiendo Guatemala y a lo que se ha negado el Salvador, sino que es necesario combatir tanto la producción como el consumo. Anteriormente, Chinchilla se había mostrado anuente a debatir el tema de la legalización para solventar las cicatrices que han dejado las políticas anti narcotráfico (*El país*, 28 de febrero de 2012).

Respecto a la represión y castigo de los delitos, uno de los principales reclamos del Banco Mundial es la baja proporción de condenas efectivas frente a los crímenes perpetrados (Banco Mundial-LAC, 2011). Sin embargo, cabe decir que, si bien muchos de los casos permanecen impunes, sobre todo en el ámbito de la violencia cotidiana, esto no se da igual para todo tipo de crimen.

Además, más bien es el parecer del politólogo costarricense Constantino Urcuyo que contrario a la opinión de los organismos internacionales, los medios de comunicación y la opinión pública, Costa Rica ha exacerbado las condenas por diversos tipos de delitos:

Contrariamente a lo que afirman algunos, las leyes no han sido suaves, hemos encarcelado de manera creciente; tanto así que según el *International Centre for Prison Studies*, Costa Rica ha pasado de 107 presos por cada 100.000 habitantes en 1992, a 191 en el 2001, y 285 en setiembre del 2011. Los medios de prensa han informado que el hacinamiento supera los 3.000 reclusos (32%). El Viceministro de Justicia ha señalado que el ámbito B tiene un 50% de sobrepoblación (*El Financiero*, 2011).

La superpoblación en las prisiones centroamericanas y el nivel de corrupción y violencia que en ellas se vive ha causado conflictos de gravedad inestimable, como los sucesos recientes del incendio en la cárcel de Honduras, cuyo manejo constituye una verdadera violación a los derechos humanos y un genocidio, al igual que también han ocurrido



enfrentamientos de importancia en la Cárcel La Reforma en San Rafael de Ojo de Agua, el principal centro penitenciario costarricense y en el Buen Pastor, centro de reclusión de mujeres.

De manera que el enfoque vigente respecto al combate de la violencia está basado en responder con medidas represivas y de vigilancia y control, en lugar de intervenir sobre sus causas estructurales, lo cual trae consecuencias sobre las mayorías, por ejemplo cuando se individualizan las responsabilidades, las cuales se les achacan principalmente, al crimen organizado y a los sectores populares.

En Costa Rica por ejemplo, se lanzan campañas “preventivas” donde se imputa involucrarse en actividades ilícitas e informales a errores y desiciones personales. Este es el ejemplo de cómo se conciben diversos problemas que van desde ventas de drogas al menudeo hasta el comercio informal en las calles, los que además, llegan a equipararse entre sí en algunos de los discursos oficiales.

Crecientemente, en el contexto de la feminización de la pobreza, crecientemente se han visto involucradas mujeres madres (en Costa Rica más del 50% de las familias con hijos son uniparentales, generalmente jefeadas por mujeres) en delitos por narcotráfico. Esto se demuestra en que la mayoría de las mujeres presas en la prisión de mujeres El Buen Pastor, lo están por la infracción a la Ley de Psicotrópicos y por delitos de tenencia y venta de drogas.

Muchas de ellas son madres solteras, que por necesidad, como lo expresa Aguirre, recurren a esta actividad económica: “por necesidad, para buscar dinero vendí ‘piedrita’ (crack) en mi casa. Me llevó a mi hija de la mano” (*Al Día*, 3 de mayo de 2009).

Este tema se extrapola a las campañas de “prevención del narcotráfico”. Por ejemplo, recientemente salió al aire una pauta en televisión donde el narrador es un niño que cuenta las actividades que realizaba todos los días con su mamá y con su hermanita, y quien se lamenta de que ya no esté su mamá a su lado porque hizo algo malo. En dicha campaña se observa que durante los paseos de la madre con sus hijos, ésta repartía dosis de cocaína a “sus amigos”, a los amigos que el niño describe que su madre saludaba durante sus caminatas.

La realidad es que mientras no se intervenga sobre los factores estructurales que producen desigualdad económica y social, no cruzaremos la línea más allá de individualizar sus causas. Costa Rica que desde el Estado del Bienestar, había logrado mantener las líneas de desigualdad relativamente aceptables, actualmente ha visto incrementar de la mano con una escalada en las desigualdades, las diversas manifestaciones de violencia. Requerimos por tanto de un mejor marco de interpretación, para comprender el ensanchamiento de los problemas sociales que nos aquejan.

En este sentido, se coincide con Magaly Sánchez (2006) quien postula que la violencia estructural se origina en las desigualdades estructurales que asolan a la región, máxime en el marco de las políticas neoliberales, las cuales generaron más desigualdades, exclusión, pobreza y alienación, lo que produce más violencia criminal y radical, la que a su vez incita más violencia y coerción de Estado, que es respondida con más resistencia desde abajo. Más aún, la violencia y la seguridad tienen cada vez más vínculos con la arena económica que caracteriza a las metrópolis latinoamericanas.

Cabe entonces referirse a la manera en que las políticas actuales anti inmigrantes, criminalizadoras de las actividades de los sectores populares e interventoras sobre el espacio social, afectan a los habitantes de San José Costa Rica, en el marco de las políticas de combate a la violencia y de seguridad en Centro América.

### **SUPERVIVENCIA EN LAS CALLES DESDE LAS MÁRGENES**

A mayor presencia de la violencia en la sociedad, también retoma importancia dentro de la economía urbana. Esta se expresa en manifestaciones criminales como el secuestro y el robo, en el incremento en la oferta y demanda de servicios de seguridad privada así como, en las presiones sobre las economías nacionales para invertir en esos rubros. Esto se da a su vez que el Estado pierde la legitimidad y el control para ejercer y controlar las expresiones de la violencia en la sociedad, tanto por el surgimiento de la seguridad privada y de grupos paramilitares que vienen a llenar sus vacíos como por las alianzas entre grupos criminales, como el narcotráfico y funcionarios y estructuras de Estado (Sánchez, 2006).

Una de las principales preocupaciones que acompañan las reflexiones y las políticas sobre inseguridad ciudadana en Centroamérica, es relativa a la seguridad para inversionistas nacionales y extranjeros. En este campo, las actividades comerciales que se caracterizan como informales así como la protección a la propiedad privada, son dos de los pilares de las políticas públicas que se implementan.

En Costa Rica, las políticas de la diferencia que buscan intervenir sobre factores estructurales o culturales que intervienen en las desigualdades prácticamente no se instituyen. Al contrario, las políticas nacionales y locales, en aras de promover la inversión extranjera, cierta estética de la ciudad y de explotar su potencial comercial y turístico, desplazan a poblaciones enteras y ejecutan medidas de segregación y de “limpieza social”, contra un contingente heterogéneo de personas, desplazados y desplazadas por la brutalidad del sistema. De esta manera, se construyen barreras imaginarias y simbólicas, mediante la acción represiva.

Las desigualdades en términos de acumulación de capital y de la tierra, aunados a la creciente desposesión y al debilitamiento del Estado del Bienestar –que velaba, al menos parcialmente, por los intereses y las necesidades de la clase trabajadora– han potenciado desde las últimas dos décadas del siglo pasado, el engrosamiento de las filas de aquello, a lo que Marx se refirió como el *lumpen*:

[...] en el concepto de Marx, el lumpen son los que se encuentran como desechos históricos de las grandes transformaciones a largo plazo en la organización de la economía, y representan el fracaso de los sistemas políticos para crear sociedades inclusivas, solidarias. Ahora bien, más que ser una categoría estable, con Foucault se abarca esta categoría en tanto adjetivo más que como marcador estable de clase, atendiendo a las subjetividades (Bourgois, 2009: 54).

En el paso del siglo XIX a finales del siglo XX, las estrategias de control y dominio contra los sectores populares se vuelcan de la obligación de trabajar impulsadas por las Leyes contra la Vagancia (Antillón, 1994);<sup>1</sup> al régimen de desempleo gestionado desde el Estado, mediante la criminalización del ejercicio de profesiones y actividades no autorizadas, en espacios vedados a este fin, para proteger los intereses de los empresarios.<sup>2</sup> Así, una vez desposeídas de sus tierras las masas de pequeños propietarios, el sistema neoliberal hoy en día nos coloca en la paradójica situación donde, a mayor cantidad de personas en necesidad de vender su fuerza de trabajo para subsistir, más vehementes las prohibiciones a formas alternativas de subsistencia para las masas desposeídas de la tierra y de los medios de producción y de préstamo de servicios.

Este contingente de trabajadores y trabajadoras, se engrosa a través de cada una de las *fallidas* metamorfosis capitalistas pos agrarias en América Latina, siendo sus consecuencias cada vez más brutales contra los sectores populares, en términos de incapacidad de absorción de la mano de obra y de desposesión de la tierra. A partir de ello, las expresiones estructurales, criminales y radicales de violencia deben acompañar el análisis de la represión contra quienes han migrado del campo a la ciudad a través de las fronteras, o desde diversos puntos, quienes comparten el hecho de estar en la situación de que local, nacional e internacionalmente se criminaliza y se persigue su modo de supervivencia; evadiendo el Estado su responsabilidad por velar por el

<sup>1</sup> Las leyes contra la vagancia estuvieron vigentes hasta 1994 en Costa Rica.

<sup>2</sup> En Latinoamérica este sector de la economía es tan importante, que para la década de los noventas representaba el 40% de los trabajadores en México, el 44% de los trabajadores en Brasil y el 41% en Venezuela, para citar algunos de los casos (Sánchez, 2006).

bienestar de los gobernados, en tiempos como éste, en los que el capital se impone sobre las condiciones de existencia de sus habitantes.

En la práctica, las estrategias de prevención y de represión de los delitos –dígase el narcotráfico– se orientan para justificar medidas que prohíben los negocios informales de ventas en la calle, so pretexto de que la mayor parte de ellos son una mampara para que se realicen actividades ilegítimas como el narcotráfico, la trata de personas y la trasiego de armas:

Hemos identificado a grupos organizados o mafias de colombianos que producen discos piratas y que incluso cuando la Policía decomisa la mercadería ellos vuelven a llenar las calles de productos falsificados. Hay muchos grupos que se enriquecen a través de los vendedores ambulantes, además roban y venden drogas (Rafael Arias, Teletica, 2010).

De esta forma, la Municipalidad atribuye a los *Otros*, a los extranjeros, a los provenientes de otros países y con problemas económicos, las causas de las ventas ambulantes en Costa Rica:

La Municipalidad había resuelto este problema del espacio público, pero hubo un descuido nuestro y de la Policía, pero también existe un factor externo como la declinación de la situación económica de otros países y sus ciudadanos buscan entonces llevar dinero a sus hogares vendiendo en calles costarricenses muy transitadas (Rafael Arias, Teletica, 2010).

El discurso político local legitima las medidas contra los vendedores ambulantes, atribuyéndoles las causas de que exista comercio informal en Costa Rica a los migrantes extranjeros. De esta manera, e intencionalmente, el gobierno local promueve culpas afuera, a la vez que invisibiliza los problemas de desempleo, subempleo y bajos salarios que afrontan el país y la región, lo que ha contribuido a disparar indicadores como pobreza extrema y desnutrición. Lo cual condena a muchos niños, niñas, jóvenes y personas adultas mayores a vivir en situaciones de miseria, con todas las consecuencias físicas y sociales que esto conlleva. Esta es una de las principales caras de la violencia estructural en Centroamérica.

Las políticas locales explotan políticamente el problema de la inseguridad, utilizándolo como justificación para hacer una limpieza social de vendedores ambulantes y personas que habitan en calle. Johnny Araya, Alcalde de San José con veinte años al frente del gobierno local, impulsó una política llamada “San José más destino que camino”. La idea es rescatar la ciudad multicultural y hacer de San José un sitio más inclusivo y más “seguro”.

Sin embargo, no se trata de un San José dispuesto a la disidencia, ni a que sus habitantes tomen libremente las calles. Más aun, así se toma el alcalde las críticas: “es preocupante el pesimismo y la sicología negativa que desde diferentes medios y grupos de presión se trasmite a nuestra sociedad. Hay quienes se empeñan en hacernos creer que aquí toda anda mal y que nada funciona” (*La Nación*, 2011).

Desde este marco, las trabajadoras y trabajadores que laboran principalmente en ventas y sin permisos municipales en las calles de la capital de Costa Rica, San José, son diariamente perseguidos, encarcelados, violentados o despojados de sus mercaderías, como parte de las estrategias de control del espacio por parte del poder local.

Sin embargo, también los vendedores ambulantes, artesanos y sectores populares crean estrategias para vender pese a la represión, aunque generalmente lo hacen temerosamente. Este contingente está organizado para evadir a la policía mediante estrategias como pitos que suenan cuando se acercan los municipales, mercadería en bolsas plásticas para poder recogerla rápidamente cuando se acerca la autoridad y vigilancia en los alrededores, para ubicar los movimientos de los municipales.

Ante los ataques de la policía, las y los vendedores y trabajadores de otras ocupaciones informales se defienden aduciendo que entienden que la policía está trabajando, pero que ellos y ellas también, solicitando respeto a sus cuerpos y sus mercancías, peleándolas cuando les son arrebatadas, generando redes entre sí, e incluso, repartíendose “propiedades” en la calle y peleándolas celosamente, en ocasiones con el uso de la violencia, posiblemente como una forma de legitimarse en el espacio y sentirse propietarios en una sociedad que protege la propiedad privada y segrega a sus habitantes del espacio público.

En relación con esto, y ante una intensificación de los controles contra ellos, en 2009, las y los ambulantes protagonizaron una serie de protestas, y obligaron a los comerciantes de la Calle 8 a cerrar sus puertas, bajo la consigna de que si ellos no podían vender, aquellos tampoco.

En este contexto, recientemente el gobierno local<sup>3</sup> del cantón de San José, la Municipalidad de San José obtuvo un voto positivo de la Sala Cuarta o Sala Constitucional de Costa Rica para eliminar todas

---

3 Las referencias a lo que ocurre en el gobierno local de San José se viculan con el Proyecto de investigación titulado *Vivencias callejeras y encuentros en la ciudad*, del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica con vigencia ene 11-dic 12 en el que participan, además de quien esto escribe, las investigadoras Mónica Brenes Montoya, Laura Paniagua Arguedas y los asistentes Maritza Loaiza (2011), Mariana Rojas (2011) y Carlos Mata (2011-2012). Se basa en la metodología de estudio etnográfico y cuenta con diversos artículos en proceso de publicación.

las ventas ambulantes en las calles de la capital, voto que se basa en que éstas impiden el libre tránsito. Cuando se dio el voto de Sala IV en enero del 2012, también las y los vendedores ambulantes organizaron una marcha exigiendo su derecho a vender. No obstante, las calles de la capital están actualmente prácticamente desoladas de este tipo de ventas.

Las últimas protestas que se han dado en la ciudad, las escenificaron estudiantes del Liceo de Costa Rica y vendedores ambulantes, el pasado 29 de febrero de 2012, en relación con el inicio de las obras para la construcción del Barrio Chino. El hecho histórico que reclamaban los estudiantes es que por la calle 9 –también conocida como Paseo de los Estudiantes– pasaron las protestas estudiantiles del Liceo de Costa Rica y el Colegio de Señoritas en 1919 en contra de la dictadura de los Tinoco (1917-1919) (Palmer, 1992), por lo que dicho Barrio se construiría por encima de la memoria de sus luchas.

A diferencia de otros países, en donde se levantan monumentos en memoria de las protestas estudiantiles y diversos tipos de luchas sociales como las revoluciones, en Costa Rica desde hace algunas décadas prácticamente sólo se realizan monumentos a la paz y a la democracia, invisibilizando las luchas contra las dictaduras y la antidemocracia a lo largo de su historia independiente. Los argumentos del gobierno local para construir el Barrio por encima de dicho Paseo, aducen a las ventajas y beneficios que trae consigo la calidad de vida de sus habitantes y para posicionar geopolíticamente a Costa Rica, planeando además que sobre los barrios multiculturales y étnicos se construye el futuro de la sociedad:

Los desafíos que impone la globalización implican el reconocimiento de la diversidad dentro de la identidad nacional. Implica comprender que ésta, la identidad, es una construcción económica, social y cultural. La integración, más que la diferenciación y la exclusión, es la tónica de las fortalezas de la ciudad (Proyecto Barrio Chino, Municipalidad de San José, 2009: 3).

No deja de ser contradictorio que se diga que en San José no se excluye y que un Barrio Chino por sí mismo reconoce e integra las diversidades, cuando al mismo tiempo, vendedores ambulantes, indigentes, migrantes sin papeles y otros son expulsados de la ciudad de San José todos los días y a todas horas. Claramente el problema no es que se construya un Barrio Chino, el tema es que tras la mampara del multiculturalismo se configuran los espacios y se crean medidas que buscan impulsar el comercio formal y la inversión extranjera, pero se deja sin posibilidades de supervivencia a quienes tienen menos recursos y más desventajas sociales, ensanchando a su vez los márgenes en las calles de la ciudad.

Una última situación que sería importante mencionar, pues evidencia que la ciudad de San José no es una ciudad inclusiva ni igual para todas y todos, es el proyecto de reubicar a los vendedores del Mercado de Artesanías. Con dicha iniciativa se expresa que el arte popular es incompatible con la San José de políticos y tecnócratas. El plan consiste en desalojar a quienes se ganan la vida con permisos municipales vendiendo artesanías, de un sitio turísticamente estratégico, el cual está ubicado frente al Museo Nacional en la Plaza de la Democracia.

De lograrse ello hay dos propuestas: ceder el terrero al transporte turístico o construir un Museo. Con este fin, el ex presidente Arias Sánchez vetó un proyecto de Ley que había sido aprobado por el Congreso que pretendía cederles el terreno a los artesanos. Esto a pesar de tratarse de una plaza pública, lo que evidencia las estrategias de privatización y concesión del espacio público ocupado por sectores populares en beneficio de unos pocos.<sup>4</sup> El alcalde de la ciudad, plantea como justificación del proyecto, la idea de trasladar a los artesanos hacia un Mercado que se está construyendo, el cual no se situaría en la zona más turística de la capital, como sí lo es donde actualmente se encuentra:

Seguimos avanzando en la construcción del Mercado de Artesanía que se ubica en el costado Sur de la Plaza de las Garantías Sociales. Este es un proyecto que busca por un lado reubicar a los artesanos que están en la plaza de la Democracia, pero también es una obra de renovación urbana y que tendrá un impacto muy positivo en el desarrollo turístico de nuestra ciudad (Facebook Johnny Araya, 21/07/2011, 20:08).

El problema es que en procura de potenciar las actividades económicas y turísticas en la ciudad, se afecta a quienes tienen menos recursos económicos y menos poder político. No obstante, el pueblo ha resistido anteriormente iniciativas similares, y el tiempo dirá si nuevamente se impondrán los sectores populares.

A propósito, más que comprender los conflictos por el comercio informal y el problema de la tierra por parte de quienes menos tienen como una desviación personal de las normas sociales, es apropiado considerarla como producto de las desigualdades estructurales, un fenómeno social. Sánchez (2006) postula que, si bien las tomas de tierras para vivienda y producción constituyen violaciones a las leyes de propiedad privada, en este momento son tan endémicas y generalizadas que no tiene sentido hablar de ellas como una violación. En el curso de esto, las fronteras entre lo formal e informal, legal e ilegal, así como entre criminal y legítimo se han difuminado: “de muchas formas, las activi-

---

<sup>4</sup> Ver video sobre el Mercado de Artesanía

dades informales ahora constituyen una parte esencial e integral de la estructura económica urbana en América Latina” (Sánchez, 2006: 181).

## **REFLEXIONES FINALES**

En este escrito, para abordar el problema de las políticas de la diferencia, se ha partido del concepto de diferencias estructurales (Martínez, 2011) y se apela al principio de justicia social (Young, 2000). Se reivindica la urgencia de mantener ondeando las banderas utópicas y continuar en la lucha contra el embate del neoliberalismo, que ha venido a encrudecer aún más, las condiciones de vida materiales y subjetivas de las mayorías.

El objeto fue abordar el problema de la violencia en Centroamérica, atendiendo a sus expresiones en el caso particular de Costa Rica evidenciando que en los países del Istmo centroamericano, donde las desigualdades sociales son tan marcadas y en las que el empobrecimiento extremo y moderado, la miseria, la flexibilización laboral y el desempleo son el pan de cada día, es muy difícil hacer reivindicaciones por la igualdad o por el reconocimiento con base en fines estrictamente culturales.

Costa Rica carece de políticas para luchas contra las causas estructurales de las desigualdades y tiene una habilidad muy ensayada para crear apariencias de igualdad y reconocimiento. Sin embargo, desde el neoliberalismo económico, con la escalada en desigualdad y violencia que trajo aparejada consigo, se hace difícil invisibilizar las magnitudes, proporciones y correspondencias que el fenómeno está alcanzando, respecto a sus hermanas centroamericanas.

El gasto y las energías que se concentran en las políticas de seguridad son insostenibles para las economías centroamericanas y aminoran los recursos que son dirigidos a atacar los factores estructurales de desigualdad. Más aun, hoy ese flanco de lucha ha sido prácticamente invisibilizado y borrado de las políticas y las reivindicaciones sociales.

Incluso la creciente criminalización de la informalidad ante las dimensiones actuales de exclusión y la segregación en Latinoamérica, se relaciona con las políticas nacionales e internacionales de seguridad y de protección a la inversión privada, las cuales se expresan también en las políticas locales. Mientras que al sector empresarial incluido el transnacional, se le facilitan cada vez más las cosas para hacer sus negocios, a los sectores populares se les reprimen crecientemente, sus estrategias para la supervivencia.

Cabría preguntarse ¿de qué van a subsistir estas personas desplazadas? Habrá que esperar para determinar si serán mayores las consecuencias de estas políticas de vigilancia control y represión o si por el contrario, vendrán intensos momentos de lucha social por sus



demandas y necesidades.

Diversos estudiosos de la violencia en Centroamérica como Bourgois, han enfatizado, que para comprender el problema de la creciente *lumpenización*, es imperativo reconocer los lazos existentes entre la violencia íntima personal y las fuerzas estructurales, en aras de acabar con el ciclo productor de humillación simbólica y perpetuador de la brutalidad en tanto se normaliza al invisibilizarla y justificarla.

Para terminar, San José construye una ciudad en las márgenes, paralela a aquella que recientemente fue nombrada por *The Economist* como una de las mejores ciudades de América Latina para vivir, y por el *Financial Times*, como una de las diez ciudades del futuro para hacer negocios.

No deja de sorprender que en la capital de *una de las mejores ciudades para vivir*, hoy esté prácticamente deshabitada en los distritos centrales. A pesar de que un millón de personas recorren diariamente los distritos centrales sólo cinco mil los habitan. Una más de las muchas contradicciones en esta ciudad, con problemas como muchas otras.

## BIBLIOGRAFÍA

- Antillón Montealegre, Walter 1997 “La legislación penal en Costa Rica”. *Ciencias Penales*, 14. En: <<http://www.cienciaspenales.org/REVISTA%2014/antill14.htm>> acceso 1° de abril de 2011.
- Araya, Johnny 2011 “Compartiendo buenas noticias” *La Nación.com*. <<http://www.nacion.com/2011-07-31/Opinion/compartiendo-buenas-noticias.aspx>> acceso 31 de julio de 2011.
- Banco Mundial-LAC 2011 *Crimen y violencia en Centroamérica. Un desafío para el desarrollo*. Departamentos de Desarrollo Sostenible y de Reducción de la Pobreza y Gestión Económica. Región de América Latina y el Caribe. <[http://siteresources.worldbank.org/INTLAC/Resources/FINAL\\_VOLUME\\_I\\_SPANISH\\_CrimeAndViolence.pdf](http://siteresources.worldbank.org/INTLAC/Resources/FINAL_VOLUME_I_SPANISH_CrimeAndViolence.pdf)> acceso 10 de enero de 2012.
- Bourgois, Phillippe 2009 “Treinta años de perspectiva etnográfica sobre la violencia en las Américas” en *Guatemala violencias desbordadas* (Guatemala: Servicio de Publicaciones/ Universidad de Córdoba).
- EFE. 2012 “Laura Chinchilla se reúne con Napolitano para hablar problemática de drogas” en *El país.cr.*, 29 de febrero <[http://www.elpais.cr/frontend/noticia\\_detalle/1/63269](http://www.elpais.cr/frontend/noticia_detalle/1/63269)> acceso 29 de febrero de 2012.
- Instituto Nacional de Estadística y Censos y Programa Naciones Unidas para el Desarrollo 2011 *La Víctimización en Costa Rica: Según los*

*resultados de los módulos de la Encuesta Nacional de Hogares 1989, 1992, 1994, 1997, 2008 y 2010* (Costa Rica: Roberto Burgos).

- Loaiza, Vanessa 2012 “Secretaria de Seguridad de Estados Unidos descarta despenalizar el narco”. En: *La Nación*. 29/02 <<http://www.nacion.com/2012-02-29/Portada/Secretaria-de-Seguridad-de-EE-UU--descarta-despenalizar-el-narco.aspx?Page=6>> acceso 29 de febrero de 2012.
- Martínez, Máriam 2011 “¿Ha quedado obsoleta la política de la diferencia? Una exploración y propuesta” en *Política y Sociedad*. N° 3, pp. 603-6, vol. 48. <<http://revistas.ucm.es/index.php/POSO/article/download/36437/36924>> acceso 14 de febrero de 2012.
- Martínez, Máriam 2008/2009 “Frágiles identidades e injusticias sociales: Política de la diferencia en democracias complejas” en *Papeles*, <<http://revistas.ucm.es/index.php/POSO/article/download/36437/36924>> acceso 14 de febrero de 2012.
- Municipalidad de San José 2009 “Proyecto Barrio Chino. Plan de trabajo. Departamento de Desarrollo Económico, Social y Cultural”. <[http://www.msj.go.cr/gob\\_ciudad/GerProSer/BarChi/Archivos/Barrio%20Chino\\_PlanTrabajo.pdf](http://www.msj.go.cr/gob_ciudad/GerProSer/BarChi/Archivos/Barrio%20Chino_PlanTrabajo.pdf)> acceso 14 de febrero de 2012.
- Palmer, Steven 2003 “Desertoras e invasoras. La feminización de la ocupación docente en Costa Rica. En: Iván Molina y Steven Palmer” en *Educando a Costa Rica. Alfabetización Popular, Formación Docente y Género (1880-1950)* (San José: Editorial Povernir/ Plumssock Mesoamerican Studies).
- Revista *Summa* 2011 “BID: Costo de violencia en Centroamérica asciende a 6500 millones de dólares” <[http://www.revistasumma.com/economia/13535-bid-costo-de-violencia-centroamerica-asciende-a-us\\$6.500-millones.html](http://www.revistasumma.com/economia/13535-bid-costo-de-violencia-centroamerica-asciende-a-us$6.500-millones.html)> acceso 12 de febrero de 2012
- Sánchez, Magally 2006 “Inseguridad y violencia como una nueva relación de poder en América Latina” en *Annals of the American Academy of Political and Social Science, Vol 606*. <<http://www.jstor.org/stable/25097823>> acceso 13 de febrero de 2012
- Sapoznikov, Jorge (s.f.) “Seguridad Ciudadana. Prevención de la violencia en Centroamérica. Banco Interamericano de Desarrollo”. <[http://www.femica.org/archivos/dis\\_sapoznikov.htm](http://www.femica.org/archivos/dis_sapoznikov.htm)> acceso 29 de febrero de 2012

Vargas, Alejandro 2009 “Casi 500 mujeres están presas en Costa Rica” en *Al Día*, 3 de mayo <[http://www.aldia.cr/ad\\_ee/2009/mayo/03/nacionales1950184.html](http://www.aldia.cr/ad_ee/2009/mayo/03/nacionales1950184.html)> acceso 12 de febrero de 2012

Urcuyo, Constantino 2012 “Crimen y violencia” en *El Financiero*, 22 de enero [http://www.elfinancierocr.com/ef\\_archivo/2012/enero/22/opinion3014138.html](http://www.elfinancierocr.com/ef_archivo/2012/enero/22/opinion3014138.html)

**OTRAS REFERENCIAS:**

Araya, Johnny (s/f) en: <<http://www.facebook.com/JohnnyArayaMonge?closeTheater=1>> acceso 11-31 de julio de 2011.

Miranda, J.R [1964] 2007 “Mercado Nacional de Artesanía La Calle” en <<http://www.youtube.com/watch?v=RtBrXKZXaV>>